

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia  
JUZGADO : 1º Juzgado Civil de Santiago  
CAUSA ROL : C-3725-2021  
CARATULADO : RODRÍGUEZ/FISCO DE CHILE

Santiago, diecinueve de Diciembre de dos mil veintidós

**VISTO:**

A folio 1, comparece **FELIPE DANIEL GONZÁLEZ BERRÍOS**, abogado, domiciliado en Estado N°215, oficina 806, comuna de Santiago, en representación judicial de **CARLOS RAMÓN DÍAZ PÉREZ**, pensionado, C.I. N°6.510.147-5, con domicilio en Los Aromos N°916, comuna de Rancagua, de **ELADIO MARCELINO AGUILAR DÍAZ**, pensionado, C.I. N°10.035.772-0, domiciliado en Hernán Mery N°1896, comuna de Antofagasta, de **ELIECER RUIZ MAYORGA**, pensionado, C.I. N°6.672.539-1, domiciliado en Rivera Sur N°11, comuna de Ancud, y de **RENÉ MAXIMILIANO RODRÍGUEZ LÓPEZ**, pensionado, C.I. N°7.942.955-4, comuna de Antofagasta, deduciendo demanda en juicio ordinario de indemnización de perjuicios, en contra del **FISCO DE CHILE**, representado legalmente por **Juan Antonio Peribonio Poduje**, en su calidad de Presidente del **Consejo de Defensa del Estado**, ambos domiciliados en



Foja: 1

calle Agustinas N°1687, comuna de Santiago, solicitando que se declare que 1) el demandado debe pagar a cada uno de los demandantes a título de indemnización de perjuicios por el daño moral sufrido causado por los crímenes perpetrados en su contra, la suma de **\$150.000.000.-**, más reajustes e intereses desde la notificación de la demanda y hasta el pago efectivo y total de las mismas, o la suma que el Tribunal estime ajustada a derecho; y 2) que se condene en costas a la demandada.

Funda la demanda, luego de consideraciones generales respecto de las violaciones a los Derechos Humanos perpetrados durante el régimen de facto iniciado en 1973, transcribe el relato de sus representados en primera persona de los acontecimientos de los que fueron víctimas y que motivan la presente demanda:

**A. Carlos Ramón Díaz Pérez**, expresa que:

*"Para la época de mi detención era militante de las Juventudes Comunistas y coordinador de los trabajos voluntarios en la ciudad de Rancagua. Por mi activa participación en estas actividades, es que el 11 de septiembre de 1973, en la vía pública, fui detenido por funcionarios de carabineros, quienes*



Foja: 1

primero me mantuvieron encerrado en la Tenencia Oriente de Carabineros, para luego trasladarme al Regimiento El Membrillar, donde permanecí hasta el 24 de septiembre de 1973.

Después estuve un día detenido en el cuartel de Investigaciones de Rancagua, posteriormente trasladado a la Gobernación donde fui interrogado y torturado, para luego pasarme nuevamente a la Tenencia Oriente de Carabineros y dejarme con arresto domiciliario.

En todos estos lugares fui sometido a un trato inhumano, cruel y degradante, golpeado con pies, puños, culatazos, me cortaron el pelo, me interrogaban y amenazaban con dañar aun más mi integridad, me presionaban intentando que diera información sobre otros dirigentes comunistas. En ninguno de estos lugares pude ejercer mi derecho a defensa, ni tampoco entregaron información sobre mi paradero a mi familia.

Por último, Carabineros me informó que debía cumplir prisión domiciliaria, la que se extendió desde el 25 de septiembre de 1973 hasta el 28 de diciembre del mismo año.



Foja: 1

*En mi detención y tortura participó el teniente Rivera y el cabo Luis Espinosa, quienes querían que yo le diera nombres de personas activistas políticas. En total, entre la detención en centros de tortura y detención domiciliaria, estuve privado de libertad durante tres meses y 17 días.*

*Producto de la tortura sufrí daños físicos como rotura de tímpano, quemaduras en el cuerpo, sordera a casa de los golpes y un profundo impacto psicológico, ya que desde estos hechos que no he podido desarrollar una vida normal, siento mucho temor cuando estoy cerca de un uniformado, independiente de la institución, quedé con mucho miedo a salir solo, pido la ayuda de mis hijos, el hecho de ser detenido en la vía pública tan joven y sin poder impedirlo, sin que nadie me pudiera ayudar, me dejó con una sensación de inseguridad y fragilidad muy fuerte, que perdura hasta hoy.*

*También debo señalar que perdí a muchos amigos a causa de la detención, mi circulo social se vio afectado porque las personas sentían miedo de relacionarse con alguien que había sido detenido, tenía miedo que a ellos los vincularan y también los detuvieran. Eso afectó para siempre mi forma de*



Foja: 1

*relacionarme, hacer amigos y colegas, me volví muy retraído.*

*Finalmente fui reconocido por el Estado de Chile como víctima directamente afectada por violaciones a los derechos humanos, que fueron individualizados en la "Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas" en etapa de Reconsideración, en el anexo elaborado por la Comisión Nacional sobre Prisión, Política y Tortura, del año 2004. Mi registro como víctima es el N° 306."*

**B. Eladio Marcelino Aguilar Díaz,** indica que:

*"Cuando fui detenido en plena dictadura, era menor de edad, tenía 17 años militaba en las Juventudes Comunistas y era dirigente estudiantil. Por estos motivos fui detenido el 28 de mayo de 1985, por funcionarios de carabineros en la vía pública, en la población Corvallis, mientras estaba colocando propaganda contra del Régimen de la Dictadura Militar.*

*Por esa razón y sin ningún tipo de formalidad, fui recluido en la Segunda Comisaría de Antofagasta, después fui trasladado al Servicio de Inteligencia de Carabineros (SICAR) y posteriormente al Cuartel de Investigaciones de la misma ciudad.*



Foja: 1

*En estos lugares fui torturado, principalmente con golpes de pies puños, patadas, fui interrogado y presencié la tortura y padecimiento de otras personas. La detención duró hasta el 5 de junio de 1985, es decir, 8 días aproximadamente.*

*Mi detención la acredité ante la Comisión Valech con un certificado del arzobispo de Antofagasta, quien me ayudó hasta obtenerla libertad, el abogado Hernán Pávez y el sacerdote Eloy Parra.*

*En los centros de detención fui golpeado, encapuchado, me aplicaron corriente como forma de tortura, también en investigaciones fui examinado por un médico, el cual dio el visto bueno para que los agentes del Estado continuaran torturándome. Recuerdo que participaron en esas sesiones de tortura en el Cuartel de Investigaciones, el señor Humberto Calderón y el agente del Servicio de Inteligencia de Carabineros (SICAR), de apellido Zambrano.*

*En una segunda oportunidad fui detenido el 23 de octubre de 1986 en la vía pública, en la antigua Avenida Cautín, acusado de activismo político por agentes de la Central Nacional de Inteligencia y estuve detenido hasta el 24 de octubre de 1986. Me*



Foja: 1

*mantuvieron en un vehículo de la CNI, recibiendo golpes y sometido a interrogatorios sobre nombres de compañeros de militancia de izquierda.*

*Frente a esta última detención mi familia presentó un recurso judicial, ya que sabían que podía repetirse la dinámica de mi primera detención.*

*Mis consecuencias a partir de la detención y la tortura, son principalmente el delirio de persecución, los recuerdos de la tortura, el no poder hacer mi vida como lo hacía antes, en paz. No volví a confiar en mis compañeros de militancia, es como que la desconfianza se instaló en mi vida. Vivo con temor a que esos hechos se vuelvan a repetir, el estallido social del año 2019 fue un ejemplo de eso, para mí fue como rememorar esa época, sentí mucho temor, como volver a los peores años de la dictadura.*

*Finalmente fui reconocido por el Estado de Chile como víctima directamente afectada por violaciones a los derechos humanos, que fueron individualizados en la "Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas", en el anexo elaborado por la Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de*



Foja: 1

*Prisión, Política y Tortura (Valech II). Mi registro como víctima es el N° 138."*

**C. Eliecer Ruiz Mayorga,** sostiene que:

*"Cuando fui detenido era operario industrial, militante del Movimiento Izquierda Revolucionaria y director del Sindicato de la fábrica donde trabajaba, en ese contexto es que escuché un llamado por radio que hicieron los Carabineros la semana del Golpe de Estado, entre un largo listado de personas que pedían acercarse a la Comisaría de Puerto Varas, estaba yo.*

*Por esa razón me presenté de manera voluntaria el 18 de septiembre de 1973 en la comisaría de Carabineros de la misma ciudad, quedando detenido de inmediato hasta el 28 de septiembre del mismo año. Estando ahí se me comunicó que estaba detenido por mi militancia política, me dejaban largas horas encerrado en un calabozo junto a otros detenidos y me sacaban solo para interrogarme.*

*En las sesiones de interrogatorio fui maltratado con golpes de puño, culatazos en el estómago, me amenazaban con matarme con la metralleta en la cabeza, de esta dinámica me quedaron cicatrices en los pómulos y en diferentes lugares del cuerpo,*





Foja: 1

espalda, piernas. Después cuando me dieron la libertad condicional, de todas formas, fui perseguido, me sacaban de mi trabajo en reiteradas ocasiones para interrogarme, me obligaban a dar nombres de personas que podían tener participación política. Fue tanta la persecución y hostigamiento de Carabineros que perdió mi trabajo, me obligaron a renunciar y quedarme cesante, estando mal psicológicamente por la tortura y con daños en mi cuerpo por la misma causa. Fue horrible, me arruinaron la vida, lo pasé muy mal económicamente y moralmente, no tenía de dónde subsistir.

Posteriormente fui detenido el 24 de febrero de 1974 en mi domicilio, también en la comuna de Llanquihue, por funcionarios de carabineros hasta el 25 de febrero del mismo año, como yo era militante del Movimiento Izquierda Revolucionaria, tenían un listado donde habían personas que la mandaban a otras partes detenidos o bien se realizaban ejecuciones, en mi caso quedé detenido solo por un día, pero como sabía que corría riesgos de una tercera detención, tuve que buscar protección en Argentina de manera clandestina.



Foja: 1

*En Argentina pedí apoyo en Neuquén, en una oficina de alto comisionado de Naciones Unidas para que me diera apoyo como refugiado, lo cual conseguí por largo tiempo.*

*Las consecuencias de la detención y la tortura son evidentes, perdí mi trabajo, perdí mi familia, mi esposa, mis dos hijos, tuve que irme a vivir a otro país, estoy hasta la fecha en tratamiento psicológico a causa de la afectación emocional que me generó la tortura, perdí la movilidad de mi brazo derecho por los golpes que recibí. Entonces, en resumen, perdí la vida que llevaba hasta el momento en que fui detenido, mi vida laboral, social y familiar, incluso perdí la posibilidad de seguir viviendo por mucho tiempo en mi país. Lamentablemente son aspectos de la vida tan importantes que no se reparan con nada, nadie me va a devolver a mi familia y la oportunidad de vivir con tranquilidad como lo hacía hasta ese momento.*

*Finalmente fui reconocido por el Estado de Chile como víctima directamente afectada por violaciones a los derechos humanos, que fueron individualizados en la "Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas", en el anexo elaborado por la Comisión Asesora*



Foja: 1

*Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión, Política y Tortura (Valech II). Mi registro como víctima es el N° 7791."*

**D. Rene Maximiliano Rodríguez López,** señala que:

*"Para la época del Golpe de Estado, era contador y militante del Partido Comunista, por lo tanto, era posible que por mi ideología y participación política corriera riesgos al igual que muchos otros compañeros, pero en mi formación, era inevitable, son convicciones por las cuales mi generación luchó.*

*En ese contexto es que fue detenido en mi domicilio particular en la comuna de La Serena por agentes de la Central Nacional de Inteligencia y funcionarios de civil, el 24 de mayo de 1985 y recién fui liberado en 1988. A raíz de mi detención, fui sometido a proceso Rol 176-85 de la fiscalía militar de La Serena, que, según los archivos de la Vicaría Solidaridad, implicaron el traspaso de mi caso al tribunal castrenses por infracción del artículo 8 de la Ley de Control de Armas y por supuestamente pertenecer a un equipo de combate, por ende, fui condenado a una pena de tres años y un día de presidio menor.*



Foja: 1

*En el marco de dicha condena, se me concedió el beneficio de remisión condicional ya que tuve que presentar una queja ante el tribunal militar, a través de la cual hice ver las irregularidades del juicio, así como las torturas.*

*Permanecí largos tres años en la cárcel de La Serena, donde fui torturado con aplicación electricidad en extremidades, en los genitales, me torturaban mojándome con agua fría en las sesiones de interrogatorio, me cubrían la cabeza con una bolsa plástica (sistema de tortura conocido como submarino), también me aplicaban tortura psicológica, como amenazas de muerte y simulacros de fusilamiento.*

*Para demostrar estos hechos, acompañé en la Comisión Valech, un certificado de antecedentes emitido por el Servicio Registro Civil e Identificación de fecha 20 de octubre de 1988, recibí ayuda de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, del abogado Rojas, del arzobispado de La Serena y de la Comisión de Derechos Humanos de la Vicaría de la Solidaridad para poder ejercer mi derecho a defensa.*



Foja: 1

*Pese a la ayuda recibida por organismos de derechos humanos, el daño ya estaba hecho, fueron tres años en que mi vida transcurrió en diferentes lugares siendo torturado, sometido a la incertidumbre de no saber qué sería de mi vida, sin saber si lograría la libertad o me ejecutarían. Todos esos temores me impiden hasta la actualidad desenvolverse con naturalidad, tengo muchas inseguridades relacionadas con el maltrato al que fui sometido en tortura, no tomo decisiones, tengo inestabilidad emocional que surgió como síntoma de manera inmediata a mi detención.*

*Finalmente fui reconocido por el Estado de Chile como víctima directamente afectada por violaciones a los derechos humanos, que fueron individualizados en la "Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas", en el anexo elaborado por la Comisión Nacional sobre Prisión, Política y Tortura, del año 2004. Mi registro como víctima es el N° 21015."*

En cuanto al derecho, arguye que, en los hechos descritos se configuran graves violaciones a los derechos humanos, consistentes en crímenes de lesa humanidad, entre otros, de tortura y persecución. En este caso, se han vulnerado todos aquellos



**Foja: 1**

instrumentos de carácter internacional que consagran el derecho a la vida y a la integridad personal, principalmente, los arts. 1, 3 y 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el art. 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; art. 1° de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; los arts. 6, 7 y 8 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todo el contenido de la Convención Contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, los Principios de Núremberg, los Convenios de Ginebra de 1949, la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y, las normas de ius cogens relativas a crímenes internacionales.

En cuanto a la obligación de reparar, afirma que en este caso, son agentes del Estado quienes han realizado las conductas ilícitas. La responsabilidad nace al momento de comisión del ilícito atribuible al Estado y, por ello, se hacen aplicables al acto en cuestión todos los criterios internacionales sobre obligaciones del Estado por violación de



**Foja: 1**

derechos humanos, dentro de las cuales se encuentra la obligación de reparar el daño causado.

Indica que esta obligación internacional de los Estados de reparar en caso de incurrir en ilícitos internacionales es un principio general del derecho internacional público, que aparece también en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, reforzado por la primacía de la persona que caracteriza a estas normas. Analiza seguidamente los medios con que cuenta el Estado para librarse de su responsabilidad; satisfacción, la restitución y la indemnización o resarcimiento, por lo que el Estado está obligado a resarcir el daño causado.

Respecto del derecho a reparación de las víctimas, invoca diversas declaraciones órganos de las Naciones Unidas, y el artículo 14 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como el artículo 75 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

En cuanto a la obligación de reparar en el derecho chileno, sostiene que la responsabilidad del Estado, consagrada en las Actas Constitucionales números 2 y 3, en la Constitución de 1980, y en la



Foja: 1

actual constitución reformada, reconoce claros antecedentes en la Constitución Política de 1925, vigente a la época de estos actos ilícitos. Sostiene que el inciso segundo del artículo 38 de la Constitución Política establece una acción constitucional para hacer efectiva la responsabilidad del Estado, cuyo fundamento básico señala estar en el inciso cuarto del artículo 1, en el inciso segundo del artículo 5, y en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política. El mismo sentido tiene el artículo 4 de la Ley 18.575.

En cuanto a la naturaleza de la responsabilidad del estado, afirma que la Excma. Corte Suprema ha sentenciado *que la responsabilidad del Estado por los daños que causan los órganos de su administración enunciada en el artículo 4° de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de esa Administración, es de Derecho Público y de carácter genérico, por emanar de la naturaleza misma de su actividad en el ámbito de las funciones que le corresponde llevar a cabo para los fines que le cometen la Constitución Política y las leyes, para lo cual debe hacer uso de las potestades, medios y acciones materiales conducentes a ellos, de lo que deduce el demandante que se excluye la aplicación de*





**Foja: 1**

normas civiles a los casos en que se hace efectiva la responsabilidad del Estado.

En cuanto al daño sufrido, sostiene que el demandante fue víctima de graves violaciones a los derechos humanos, en particular de crímenes de lesa humanidad, por las características con las que fueron llevados a cabo y por el daño causado. Añade que la tortura se configura por la concurrencia de tres requisitos: (a) La causación de sufrimiento, acreditado; (b) Por la participación de agentes estatales o para estatales, acreditado y; (c) Que esta sea cometida con determinados fines a saber: Obtener de la víctima o de un tercero información o una confesión, como ocurre en la especie, muchas veces intentando obtener confesiones sobre hechos que sabían falsos; castigar a la víctima o un tercero por un acto que haya cometido o se sospeche que haya cometido. Sostiene que la tortura y los padecimientos físicos dejan secuelas físicas, mentales y psicosomáticas para toda la vida.

En cuanto a la extensión del derecho a la reparación integral, señala que el término de indemnización es el que cobra relevancia en este caso, pues ésta se divide en indemnización por daño



**Foja: 1**

material e indemnización por daño moral, siendo ésta su pretensión de la demanda. Finalmente concluye que, por concepto de daño moral, para intentar compensar el sufrimiento causado por el secuestro, tortura física y psicológica, represión política y persecución durante la dictadura, por el sufrimiento grave y la angustia que dicha experiencia ha causado a sus representados solicita la suma de \$150.000.000, con reajustes e intereses.

Sostiene seguidamente que las acciones que emanan de la comisión de crímenes contra la humanidad son imprescriptibles, al igual que la acción penal, siendo excepción a la institución de la prescripción extintiva. Invoca también, el artículo 29 del Estatuto de la Corte Penal Internacional que señala "*Los crímenes de la competencia de la Corte no prescribirán*", sin distinguir entre acción penal y acción civil, lo cual es reafirmado por el artículo 75 del mismo Estatuto. Por lo tanto, en virtud de un principio sistemático y coherente del ordenamiento jurídico, deduce que la acción para obtener la indemnización de perjuicios derivados de delitos de lesa humanidad no prescribe, inferencia que se condice con dos principios de interpretación; "*donde el legislador*



Foja: 1

*no distingue, no corresponde al intérprete distinguir" y "a la misma razón, misma disposición", en este sentido, al no distinguirse entre acciones que no prescriben, no corresponde al juez determinar que una acción si prescribe y la otra no.*

**A folio 10,** rola notificación de la demanda, practicada el 24 de agosto de 2021.

**A folio 11,** comparece Ruth Israel López, abogada Procuradora Fiscal en representación del Fisco de Chile, quien contestó la demanda, oponiendo como primera cuestión, la **excepción de reparación satisfactiva;** esgrimiendo la improcedencia de la indemnización alegada por haber sido ya indemnizados los actores, exponiendo latamente, el marco general sobre las reparaciones otorgadas, agregando que las negociaciones entre el Estado y las víctimas, revelan que tras toda reparación existe una compleja decisión de mover recursos públicos, desde la satisfacción de un tipo de necesidades públicas a la satisfacción de otras, radicadas en grupos humanos más específicos; concurso de intereses que se exhibe normalmente en la diversidad de contenidas que las Comisiones de Verdad o Reconciliación proponen como programas de reparación; programas que incluyen



Foja: 1

beneficios educativos, de salud, gestos simbólicos u otras medidas análogas, diversas a la simple entrega de una cantidad de dinero.

Señala que dentro de los objetivos a los cuales se abocó preferentemente la llamada Comisión Verdad y Reconciliación, también llamada "Comisión Rettig", en su Informe Final propuso una serie de "propuestas de reparación", entre las cuales se encontraba una **pensión única de reparación** para los familiares directos de las víctimas, y algunas prestaciones de salud. Dicho informe, sirvió de causa y justificación al proyecto de ley que el Presidente envió al Congreso, que derivaría en la Ley 19.123, que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación; por él se buscaba, en términos generales, **"reparar precisamente el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de víctimas"**, a que se refiere su artículo 18.

Asumida esta "idea reparatoria", tanto la Ley 19.123 y las demás normas conexas, como por ejemplo la Ley 19.992, referida a las víctimas de tortura, han establecido los distintos mecanismos mediante los cuales se ha concretado la compensación,



**Foja: 1**

exhibiendo aquella síntesis que explica como nuestro país ha afrontado este complejo proceso de justicia transicional.

Así, se puede indicar que la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se ha realizado principalmente a través de tres tipos de compensaciones, a saber: a) reparaciones mediante transferencias directas de dinero; b) reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y c) reparaciones simbólicas.

Afirma que en la especie, los actores han percibido beneficios pecuniarios al amparo de las Leyes N° 19.234 y N° 19.992 y N° 20.134. La ley 19.992 que estableció una pensión anual de reparación y otorgó otros beneficios a favor de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos individualizados en el anexo "Listado de Prisioneros Políticos y Torturados" de la nómina de personas reconocidas como víctimas; así, se estableció una pensión anual reajutable de \$1.353.798 para beneficiarios menores de 70 años; de \$1.480.284 para beneficiarios de 70 o más años de edad y de \$1.549.422, para beneficiarios mayores de



Foja: 1

75 años de edad, haciendo presente además que percibieron en forma reciente el aporte único de reparación Ley N°20.874, por **\$1.000.000.-**

Agrega que a los beneficiarios, tanto de la Ley 19.234 como de la Ley 19.992, les fue concedido el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) en servicios de salud del país, agregando que también se les otorgaron beneficios educacionales, consistentes en la continuidad gratuita de estudios básicos, medios o superiores, a través de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación; y asimismo, beneficios en vivienda.

Finalmente, hace presente las reparaciones simbólicas, mediante actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones; las que pretenden reparar, ya no a través de un pago de dinero paliativo del dolor -siempre discutible en sus virtudes compensatorias- sino precisamente tratando de entregar una satisfacción a esas víctimas que en parte logre reparar el dolor y la tristeza actual y con ello reducir el daño moral.



Foja: 1

De lo expuesto, sostiene que puede concluirse que los esfuerzos realizados por el Estado para reparar a las víctimas de DD.HH han cumplido todos los estándares internacionales de Justicia Transicional y han provisto indemnizaciones razonables a nuestra realidad financiera; escenario en el que tanto la indemnización que se solicita en autos, como el cúmulo de reparaciones hasta ahora aludidas, pretenden compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos, de lo que resulta concluir que los referidos mecanismos de reparación han compensado precisamente aquellos daños, no pudiendo ser, entonces, reparados nuevamente; citando jurisprudencia relativa a tal situación; motivo por el cual, en definitiva, **opone la excepción de reparación integral**, por ya haber sido indemnizado el actor.

En subsidio de la excepción anterior, **opone la prescripción extintiva de la acción**, con arreglo, en primer lugar, a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 2497 del mismo texto, solicitando en consecuencia que, por encontrarse prescrita la acción, se rechace la demanda en todas sus partes.



**Foja: 1**

Según el relato efectuado por los mismo actores, las detenciones ilegales y torturas que sufrieron, ocurrieron, en el caso del demandante Díaz Pérez, en la ciudad de Rancagua, desde el 11 al 24 de septiembre del año 1973, y luego detención domiciliaria desde el 25 de septiembre y hasta el 28 de diciembre del mismo año 1973; en el caso del demandante Aguilar Díaz, en la ciudad de Antofagasta, desde el 28 de mayo y hasta el 5 de junio de 1985, y luego una segunda detención desde el 23 al 24 de octubre de 1986; en el caso del demandante Ruiz Mayorga, su detención ocurrió en la ciudad de Puerto Varas, desde el 18 al 28 de septiembre de 1973, y luego una segunda detención desde el 24 al 25 de febrero de 1974; y, finalmente, en el caso del demandante Rodríguez López, su detención ocurrió en la ciudad de La Serena, desde el día 24 de mayo de 1985 y hasta una fecha indeterminada del año 1988; entonces, aun entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en Septiembre de 1973, por la imposibilidad de las propias víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, a la fecha





Foja: 1

de notificación de la demanda de autos, esto es, el **24 de agosto de 2021**, ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2332 del Código Civil; motivo por el cual opone la excepción de prescripción de 4 años establecida en dicha norma.

En subsidio, y para el caso de que el Tribunal estime que dicha norma no es aplicable, **opone la excepción de prescripción extintiva** de 5 años, contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2515, en relación con el artículo 2514, del ya citado código; debido a que, entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la anotada fecha de notificación de la acción civil de marras, transcurrió también con creces, el plazo pertinente.

Posteriormente, realiza un lato análisis relativo a la prescripción, haciendo presente que no existe norma especial que determine qué plazo de prescripción debe aplicarse en estos casos, por lo que debe recurrirse al derecho común, que en esta materia está representado por la regulación del Código Civil relativa a la responsabilidad extracontractual (artículo 2332); agregando que el



Foja: 1

plazo debe contarse, en la especie, no desde la detención del demandante, sino que desde que los titulares de la acción indemnizatoria tuvieron conocimiento y contaron con la información necesaria y pertinente para hacer valer el derecho al resarcimiento del daño ante los tribunales de justicia; haciendo presente además que numerosa jurisprudencia sobre la materia reiteran tal circunstancia.

Sostiene que la prescripción es una institución universal y de orden público, y que las normas que la consagran, contempladas en el Título XLII del Libro IV del Código Civil, se han estimado siempre de aplicación general a todo el derecho, y no sólo al privado. La imprescriptibilidad es excepcional y requiere una declaración explícita, que en este caso no existe.

Finalmente, sostiene que los ninguno de los instrumentos internacionales contempla la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de delitos o crímenes de lesa humanidad o que prohíba o impida la aplicación del derecho interno en la materia; haciendo presente que dichos instrumentos, tales como la "Convención sobre la



**Foja: 1**

Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad", los "Convenios de Ginebra", la "Resolución N° 3.074, de fecha 3 de Diciembre de 1973, de la Asamblea General de las Naciones Unidas", y la "Convención Americana de Derechos Humanos", establecen imprescriptibilidad para las acciones penales.

En subsidio de las defensas planteadas, y en cuanto al daño e indemnización reclamadas, formula las siguientes alegaciones en cuanto a la naturaleza de la indemnización solicitada y del excesivo monto pretendido; señalando que la cifra pretendida en la demanda como compensación del daño moral, resulta excesiva, teniendo en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile y los montos promedios fijados por nuestros Tribunales de Justicia, que en esta materia han actuado con mucha prudencia.

En subsidio de las excepciones previas, indica que la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos por el actor de parte del Estado, conforme a las leyes de reparación (N°19.234 y 19.992, sus modificaciones y demás normativa pertinente), y que, por lo demás, "seguirá



Foja: 1

percibiendo a título de pensión", como también los beneficios extrapatrimoniales que estos cuerpos legales contemplan, pues todos ellos tuvieron por objeto reparar el daño moral y guardar armonía con los montos establecidos por los Tribunales; haciendo presente que, de no accederse a tal petición subsidiaria, implicaría un doble pago por un mismo hecho, lo que contraría los principios jurídicos básicos del derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces.

Seguidamente, alega la improcedencia del pago de reajustes e intereses, por cuanto los reajustes sólo pueden devengarse en el caso de que la sentencia que se dicte en la causa acoja la demanda y establezca la obligación y además desde que la sentencia se encuentra firme o ejecutoriada; y en cuanto a los intereses, señala que conforme al artículo 1551 del Código Civil, el deudor no está en mora sino hasta cuando ha sido judicialmente reconvenido y ha retardado el cumplimiento de la sentencia; cuestión que así ha establecido la jurisprudencia, de manera uniforme; motivos por los cuales los reajustes e intereses, sólo podrán devengarse desde que la



Foja: 1

sentencia condenatoria se encuentra firme o ejecutoriada y su parte incurra en mora.

**A folio 15,** la parte demandante evacuó el trámite de la réplica, reitera todos los argumentos de hecho y derecho aludidos en el libelo de demanda.

En cuanto a la **excepción de reparación satisfactiva o integral, o de pago,** opuesta por el demandado, añade a lo ya señalado en la demanda que pretender que una pensión que bordea los \$130.000.-, definida por el propio Estado como "austera y simbólica" es la reparación que mandata el Derecho internacional carece de cualquier asidero, pues la insuficiencia de las reparaciones puede establecerse comparándolas con el ingreso mínimo.

Señala la Ley N° 19.123, que el demandado esgrime como justificación para decir que el daño moral ya está resarcido, en su artículo 2 establece que "*Le corresponderá especialmente a la Corporación (...) Promover la reparación del daño moral de las víctimas*", y observa que la palabra promover no es sinónimo de reparar, y en el caso de su mandante, no se ha reparado íntegramente el daño moral, porque el sentimiento de injusticia y de no haber sido reparada totalmente subsiste intacto. Incluso el



Foja: 1

tenor literal de la propia Ley N° 19.123, esta no considera incompatibles la pensión de sobrevivencia con una eventual indemnización de perjuicios que repare el daño moral, según el tenor inequívoco de su artículo 24: "*La pensión de reparación puede ser compatible con cualquiera otra, de cualquier carácter, de que goce o pudiere corresponder al respectivo beneficiario*".

Respecto de la **excepción de prescripción extintiva**, agrega que sea cual sea el estatuto de responsabilidad aplicable, es indiscutible la existencia de responsabilidad del Estado, por hechos gravísimos que los particulares afectados no tienen obligación jurídica de soportar. En un Estado de constitucional de Derecho el principio de responsabilidad es parte de la esencia del mismo. La irresponsabilidad por actos del Estado es característica de regímenes absolutos, despóticos o autoritarios. Los daños que causa un Estado, más aún aquellos provocados intencionalmente, son hechos ilícitos que generan responsabilidad, lo cual es un principio del Derecho aceptado por las naciones civilizadas en los términos de la Corte Internacional de Justicia.



Foja: 1

Así, prosigue, la fundamental diferencia entre las reglas de la prescripción extintiva del Código Civil que buscan sancionar al acreedor negligente, o el régimen normativo aplicable a la reparación de daños causados por animales fieros, por remover las losas de una acequia, por personas ebrias u objetos que caen de la parte superior de un edificio. A este efecto, reitera lo expuesto por el Magistrado de la Corte Interamericana E. Raúl Zaffaroni: *"La prescripción civil se invoca sólo en función de la seguridad de los negocios y de la propiedad, pero lo grave es que muchas veces la propiedad cuya seguridad se invoca es ella misma efecto del crimen cometido (...). Invocar la simple prescripción civil para negar cualquier derecho de reparación o de restitución en caso de crímenes contra la humanidad no es una mera cuestión de neutralización del reclamo, sino un verdadero escándalo jurídico" (...)"*.

En cuanto al monto demandado, afirma que resulta difícil avaluar daños de naturaleza no patrimonial, pero que la normativa exige formular peticiones concretas. Añade que se pidió en subsidio que se condene a la suma que el Tribunal estime ajustada a derecho, justicia y equidad.



Foja: 1

Respecto de los reajustes, sostiene que, siendo el juez de la instancia quien determina la cuantía, procede que estas sean reajustadas desde la dictación del fallo de primera instancia, momento en que queda fijada la pretensión y, en cuanto a los intereses, afirma que existe una tendencia jurisprudencial asentada en que para dar cumplimiento al principio de la reparación integral, es menester que a la víctima no solo se le concedan reajustes sobre las sumas fijadas como indemnización, sino además intereses.

**A folio 17,** la demandada evacúa la réplica, solicitando se tengan por reiteradas todas las alegaciones expuestas en su contestación.

**A folio 20,** se recibió la causa a prueba.

**A folio 31,** se citó a las partes a oír sentencia.

**CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que, como se dijo, **FELIPE DANIEL GONZÁLEZ BERRÍOS,** abogado, en representación judicial de **CARLOS RAMÓN DÍAZ PÉREZ, ELADIO MARCELINO AGUILAR DÍAZ, ELIECER RUIZ MAYORGA y RENÉ MAXIMILIANO RODRÍGUEZ,** deduce demanda en juicio





Foja: 1

ordinario de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual, en contra del **FISCO DE CHILE**, representado legalmente por **Juan Antonio Peribonio Poduje**, en su calidad de Presidente del **Consejo de Defensa del Estado**, y con la cual pretende se acoja la demanda, solicitando se declare que: 1) el demandado debe pagar a cada uno de los demandantes a título de indemnización de perjuicios por el daño moral sufrido causado por los crímenes perpetrados en su contra, la suma de **\$150.000.000.-**, más reajustes e intereses desde la notificación de la demanda y hasta el pago efectivo y total de las mismas, o la suma que el Tribunal estime ajustada a derecho; y 2) que se condene en costas a la demandada.

Funda su pretensión en los argumentos ya explicitados en la expositiva, que por economía procesal, se tienen por reproducidos para todo efecto legal.

**SEGUNDO:** Que, notificado el demandado, contestó la demanda y se evacuaron los trámites de réplica y dúplica, conforme las alegaciones y defensas debidamente reseñadas en la expositiva, que por



Foja: 1

economía procesal, se tienen por reproducidos para todo efecto legal.

**TERCERO:** Que, a objeto de acreditar sus alegaciones, la parte demandante se valió de los siguientes medios probatorios:

**- DOCUMENTAL:**

**A folio 28:**

1. Copia de Carpeta de Antecedentes entregada ante la Comisión Valech, por Carlos Ramón Díaz Pérez.

2. Copia de Informe Médico Psicológico de Evaluación de Daño emitido por el equipo del Programa de Reparación y Atención Integral en Salud (PRAIS) del Servicio de Salud O'Higgins, Tomas Valladares Pinto, psicólogo, y Rodolfo Beltrán Briones, médico, realizado a Carlos Ramón Díaz Pérez, de fecha mayo 2022.

3. Copia de Certificado del Instituto Nacional de Derechos Humanos que da cuenta de que Carlos Ramón Díaz Pérez se encuentra calificado como víctima en el listado de prisioneros políticos y torturados, elaborado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, con copia de página 794



**Foja: 1**

de la nómina, en la que se observa el nombre del actor con el número **306**.

4. Copia de Carpeta de Antecedentes entregada ante la Comisión Valech, por Eladio Marcelino Aguilar Díaz.

5. Copia de Informe Médico Psicológico de Evaluación de Daño asociado a violencia política en dictadura, emitido por Cristian Mauricio Vilches Guerra, psicólogo clínico, realizado a Eladio Marcelino Aguilar Díaz, de fecha 30 de diciembre de 2021.

6. Copia de Certificado del Instituto Nacional de Derechos Humanos que da cuenta de que Eladio Marcelino Aguilar Díaz se encuentra calificado como víctima en el listado de prisioneros políticos y torturados, elaborado por la Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, con copia de página 3 de la nómina, en la que se observa el nombre del actor con el número **138**.

7. Copia de Carpeta de Antecedentes entregada ante la Comisión Valech, por Eliecer Ruíz Mayorga.



Foja: 1

8. Copia de Informe Médico Psicológico de Evaluación de Daño asociado a violaciones graves a los derechos humanos en dictadura, emitido por Cristian Mauricio Vilches Guerra, psicólogo clínico, realizado a Eliecer Ruiz Mayorga, de fecha 5 de junio de 2022.

9. Copia de Certificado del Instituto Nacional de Derechos Humanos que da cuenta de que Eliecer Ruiz Mayorga se encuentra calificado como víctima en el listado de prisioneros políticos y torturados, elaborado por la Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, con copia de página 154 de la nómina, en la que se observa el nombre del actor con el número **7791**.

10. Copia de Carpeta de Antecedentes entregada ante la Comisión Valech, por René Maximiliano Rodríguez López.

11. Copia de Informe Médico Psicológico de Evaluación de Daño asociado a violencia política en dictadura, emitido por Cristian Mauricio Vilches Guerra, psicólogo clínico, realizado a René



Foja: 1

Maximiliano Rodríguez López, de fecha 29 de enero de 2022.

12. Copia de Certificado del Instituto Nacional de Derechos Humanos que da cuenta de que René Maximiliano Rodríguez López se encuentra calificado como víctima en el listado de prisioneros políticos y torturados, elaborado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, con copia de página 723 de la nómina, en la que se observa el nombre del actor con el número **21015**.

**CUARTO:** Que, el demandado solo rinde como probanza oficio respuesta del Instituto de Previsión Social **N°4792/7375**, rolante a **folio 26**, que da cuenta que los demandantes han recibido al día 9 de junio de 2022, los siguientes beneficios de reparación de las Leyes N°s 19.234, 19.992 y 20.874:

**1. CARLOS RAMON DIAZ PEREZ**, la cantidad de \$6.195.553.-, por concepto de Pensión Ley 19.992; \$1.000.000.-, por Aporte Único Ley 20.874; \$31.628.310.-, por concepto de Pensión Ley 19.234, y \$562.653.-, por concepto de aguinaldos, lo que totaliza **\$39.386.516.-**. Su pensión actual es de \$229.330.-.



Foja: 1

**2. ELADIO MARCELINO AGUILAR DIAZ**, la cantidad de \$22.332.244.-, por concepto de Pensión Ley 19.992; \$1.000.000.-, por Aporte Único Ley 20.874; y \$400.374.-, por concepto de aguinaldos, lo que totaliza **\$23.732.618.-**. Su pensión actual es de \$207.774.-.

**3. ELIECER RUIZ MAYORGA**, la cantidad de \$22.448.637.-, por concepto de Pensión Ley 19.992; y, \$400.374.-, por concepto de aguinaldos, lo que totaliza **\$22.849.011.-**. Su pensión actual es de \$227.173.-.

**4. RENE MAXIMILIANO RODRIGUEZ LOPEZ**, la cantidad de \$32.619.082.-, por concepto de Pensión Ley 19.992; \$1.000.000.-, por Aporte Único Ley 20.874; y \$562.653.-, por concepto de aguinaldos, lo que totaliza **\$34.181.735.-**. Su pensión actual es de \$207.774.-.

**QUINTO:** Que, son hechos de la causa, por no haber sido objeto de controversia, que se encuentran además acreditados con el mérito del documento reseñado en el motivo anterior, los siguientes:

1. Que los actores tienen la calidad de "Víctima de Prisión Política y Tortura", conforme al Informe Valech I ó Valech II;



Foja: 1

2. Que al mes de junio de 2022, los actores han percibido: A) Carlos Ramón Díaz Pérez, la cantidad de \$6.195.553.-, por concepto de Pensión Ley 19.992; \$1.000.000.-, por Aporte Único Ley 20.874; \$31.628.310.-, por concepto de Pensión Ley 19.234, y \$562.653.-, por concepto de aguinaldos, lo que totaliza **\$39.386.516.-**. Su pensión actual es de \$229.330.-; B) Eladio Marcelino Aguilar Díaz, la cantidad de \$22.332.244.-, por concepto de Pensión Ley 19.992; \$1.000.000.-, por Aporte Único Ley 20.874; y \$400.374.-, por concepto de aguinaldos, lo que totaliza **\$23.732.618.-**. Su pensión actual es de \$207.774.-; C) Eliecer Ruiz Mayorga, la cantidad de \$22.448.637.-, por concepto de Pensión Ley 19.992; y, \$400.374.-, por concepto de aguinaldos, lo que totaliza **\$22.849.011.-**. Su pensión actual es de \$227.173.-; y, D) Rene Maximiliano Rodríguez López, la cantidad de \$32.619.082.-, por concepto de Pensión Ley 19.992; \$1.000.000.-, por Aporte Único Ley 20.874; y \$562.653.-, por concepto de aguinaldos, lo que totaliza **\$34.181.735.-**. Su pensión actual es de \$207.774.-.

**SEXTO:** Que, el 11 de Noviembre de 2003, transcurridos **13 años** desde que se restableció el Estado de Derecho en nuestro país, durante el



**Foja: 1**

gobierno del Ex Presidente, S.E Ricardo Lagos Escobar, se dictó el Decreto N° 1040, mediante el cual se creó la "Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, para el Esclarecimiento de la Verdad acerca de las Violaciones de Derechos Humanos en Chile", cuyo objetivo, de acuerdo a las palabras del propio gestor, fue determinar el universo de las personas que sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas, entre Septiembre de 1973 y Marzo de 1990; que se materializó en un Informe que consta de más de 500 páginas, elaborado con 28.000 testimonios de considerados válidos (se recibió testimonio de 35.865 personas, residentes en Chile como en el extranjero); de los que, con la debida prudencia y cautela, se deja constancia en el mismo informe, sin individualizar nombres ni algún otro dato personal, sino únicamente el sexo del declarante, y el lugar en que fue detenido.

Conjuntamente con el informe, la Comisión elaboró un listado con los nombres de las personas a quienes se les reconoció la calidad de Presos Políticos y Torturados, con un total de **27.153** personas.





Foja: 1

**SÉPTIMO:** Que, posteriormente, y con ocasión del resultado de la labor de la Comisión, fue dictada la Ley N° 19.992, publicada con fecha 24 de Diciembre de 2004, que "Establece Pensión de Reparación y Otorga otros Beneficios a Favor de las Personas que indica", cuyo artículo primero, contenido en el Título I "De la pensión de reparación y bono", dispone: *"Establécese una pensión anual de reparación en beneficio de las víctimas directamente afectadas por violaciones a los derechos humanos individualizadas en el anexo "Listado de Prisioneros Políticos y Torturados", de la Nómina de personas reconocidas como Víctimas, que forma parte del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, creada por el decreto supremo N° 1.040, de 2003, del Ministerio del Interior."*

El artículo segundo, establece que la pensión anual aludida, ascendería a **\$1.353.798.-**, para aquellos beneficiarios menores de 70 años de edad; a **\$1.480.284** para aquellos beneficiarios mayores de 70 o más años pero menores de 75 años; y a **\$1.549.422**, para aquellos beneficiarios de 75 o más años de edad; pensión que se pagaría en 12 cuotas mensuales de igual monto, reajutable conforme lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto Ley N°



Foja: 1

2.448, de 1979, o en las normas legales que reemplacen dicha disposición.

Su inciso segundo, establece que la pensión referida, sería incompatible con aquellas otorgadas en las leyes números 19.234, 19.582 y 19.881, pudiendo quiénes se encuentren en tal situación optar por uno de estos beneficios en la forma que determine el Reglamento; precisando que las personas que ejercieran dicha opción, tendrían derecho a un bono de \$ 3.000.000, el que se pagaría por una sola vez dentro del mes subsiguiente de ejercida la opción.

El artículo séptimo, dispone que tanto la pensión como el bono establecidos, se devengarían a partir del primer día del mes subsiguiente a la fecha en que los beneficiarios presenten sus solicitudes, las que podrían ser solicitadas desde la publicación de la misma (ley).

**OCTAVO:** Que, por otro lado, mediante la Ley N° **20.874**, publicada con fecha 29 de Octubre de 2015, que "Otorga un aporte único, de carácter reparatorio, a las víctimas de prisión política y tortura, reconocidas por el Estado de Chile", de acuerdo a su artículo primero, se otorgó un aporte



Foja: 1

único en carácter de reparación parcial, de **\$1.000.000.-**, a los titulares individualizados en la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, y a los titulares incluidos en la nómina de víctimas de prisión política y tortura elaborada por la Comisión asesora para la calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y víctimas de Prisión Política y Tortura, conforme a las leyes N° 19.992 y N° 20.405, respectivamente.

El inciso tercero, dispone que: *"Con todo, el aporte a que se refiere este artículo será imputable al monto que, en su caso, se otorgue por concepto de reparación pecuniaria a cada víctima de prisión política y tortura."*

**NOVENO:** Que, tal como consta de los documentos reseñados en el motivo cuarto, los demandantes detentan la calidad de "Preso Político y Torturado", constando en autos que perciben en virtud de tal calidad, al mes de junio de 2022, las siguientes sumas: **Carlos Ramón Díaz Pérez, la cantidad de \$39.386.516.-, por concepto de pensión de reparación; Eladio Marcelino Aguilar Díaz, la**



Foja: 1

cantidad de \$23.732.618.-, por concepto de pensión de reparación; Eliecer Ruiz Mayorga, la cantidad de \$22.849.011.-, por concepto de pensión de reparación; y, Rene Maximiliano Rodríguez López, la cantidad de \$34.181.735.-, por concepto de pensión de reparación.

**DÉCIMO:** Que la excepción de pago (reparación integral) opuesta por el Fisco de Chile se ha fundado, como ya se dijo, en que los actores ya han sido indemnizados, en razón de haber recibido beneficios pecuniarios al amparo de la Ley N° 19.992 y sus modificaciones; resultando en consecuencia improcedente ser indemnizados por daños cuya génesis radica en idénticos hechos.

**DÉCIMOPRIMERO:** Que, al respecto, cabe aplicar los argumentos esgrimidos por la Excma. Corte Suprema, en orden a que el hecho de reconocer el Estado la condición de "Preso Político y Torturado" constituye un acto unilateral, y sus efectos, como en la especie lo es el pago de la pensión a las víctimas, no resulta posible entenderlos como una "indemnización", como pretende el Fisco al sostener su excepción de pago o reparación integral, ya que, de aceptarse tal circunstancia, daría lugar a



Foja: 1

entender que lo que el Estado de Chile pretendió al crear la "Comisión Valech" fue, con el mérito de sus resultados, en estricto rigor, efectuar una "transacción" con cada uno de los beneficiados, para así precaver la interposición de una acción como la de marras; cuestión que no aparece del tenor literal de la ley, ni tampoco de su espíritu, toda vez que en ella se establece que la pensión sería incompatible con aquellas otorgadas en las leyes números 19.234, 19.582 y 19.881, pudiendo quienes se encontraren en tal situación optar por uno de dichos beneficios en la forma que determine el Reglamento; situación de la que resulta entonces concluir que, no obstante ser los actores beneficiarios de la pensión otorgada por el Estado, en su condición de "preso político torturado", tal hecho no era óbice para que interpusieran la acción civil pertinente, como lo han hecho mediante la demanda de marras; motivos todos los cuales conducen a **desestimar la excepción de pago (reparación integral) opuesta por el Fisco.**

En efecto, este derecho de las víctimas y sus familiares encuentra su fundamento en los principios generales de Derecho Internacional de los Derechos Humanos y, la consagración normativa, en los



Foja: 1

tratados internacionales ratificados por Chile, los cuales obligan al Estado a reconocer y proteger este derecho a la reparación íntegra, en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5° y en el artículo 6° de la Carta Fundamental, y por ende es obligación del Estado reparar todo daño que se haya ocasionado.

**DECIMOSEGUNDO:** Que, en subsidio de la excepción razonada previamente, el demandado opuso la **excepción de prescripción de la acción**, fundado en los argumentos ya explicitados en el presente fallo.

Ante tal alegación, cabe tener presente que, fluye del artículo quinto de nuestra Constitución, el ejercicio de la soberanía se realiza por el pueblo a través del plebiscito y también, se realiza por las autoridades que la misma Carta establece.

Dicho ejercicio, reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana; y es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por la Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.



Foja: 1

Dicha disposición constitucional, hace posible incorporar al derecho nacional las obligaciones contempladas en los instrumentos internacionales, tales como la de indemnizar íntegramente los daños cometidos por violaciones de los derechos humanos; que, en consecuencia, adquiere rango constitucional.

**DECIMOTERCERO:** Que, la Excma. Corte Suprema, en los autos Rol **22.856-2015**, de fecha 29 de Diciembre de 2015, ha señalado que, *"tratándose de un delito de lesa humanidad -lo que ha sido declarado en la especie-, cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la correlativa acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción contempladas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional, en armonía con el inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental, que instauro el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito, e incluso por el propio derecho interno, que, en virtud de la ley N° 19.123, reconoció en forma explícita la innegable*



Foja: 1

existencia de los daños y concedió también a los familiares de aquellos calificados como detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, por violación a los derechos humanos en el período 1973-1990, regalías de carácter económico o pecuniario. En esta línea discurren también SCS Nros. 20.288-14, de 13 de abril de 2105; 1.424, de 1 de abril de 2014; 22.652, de 31 de marzo de 2015, entre otras.

Por ende, cualquier pretendida diferenciación en orden a dividir ambas acciones y otorgarles un tratamiento desigual resulta discriminatoria y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia y unidad indispensables en un Estado de derecho democrático. Entonces, pretender el empleo de las disposiciones del Código Civil en la responsabilidad derivada de crímenes de lesa humanidad posibles de cometer con la activa colaboración del Estado, como derecho común supletorio a todo el régimen jurídico, hoy resulta improcedente.

Por lo demás, la reparación integral del menoscabo no se discute en el plano internacional, ni se circunscribe a los autores de los crímenes exclusivamente, sino también se prolonga hacia el





Foja: 1

*mismo Estado. La preceptiva internacional no ha creado un sistema de responsabilidad, lo ha reconocido, desde que, sin duda, siempre ha existido, con evolución de las herramientas destinadas a hacer más expedita, simple y eficaz su declaración, en atención a la naturaleza de la violación y del derecho violentado."*

Tal como lo ha sostenido la jurisprudencia, no parece consistente ni coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas de prescripción establecidas en la legislación interna pues aquello contraría la voluntad expresa manifestada en la normativa internacional sobre Derechos Humanos e incluso reconocida en las Leyes N° 19.123 Y 19.992 que reconoce de manera explícita la existencia de daños y concedió beneficios económicos, por lo que otorgarles un trato desigual es discriminatoria y el ordenamiento jurídico no lo permite.

Por todo lo expuesto, la excepción de prescripción será desestimada; misma suerte que correrá la excepción de prescripción subsidiaria, por encontrar ésta, de igual manera, su fundamento



Foja: 1

en normas de derecho interno, que, como ya es claro, no son aplicables al caso de autos.

**DECIMOCUARTO:** Que, habiéndose desestimado la prescripción de la acción civil, cabe ahora pronunciarse **sobre la procedencia de la indemnización pretendida.**

Como ya se encuentra acreditado, y sin ánimo de agotar el asunto, cada uno de los actores detenta, la condición de "Preso Político y Torturado", detención que es del todo plausible sostener, se debió a sus tendencias políticas, esto es, su militancia en las *Juventudes Comunista* o *Movimiento Izquierda Revolucionaria*.

Siendo tales circunstancias aquellas que motivaron la detención y posterior tortura, física y psicológica; es pertinente señalar que los actos ejercidos por agentes del estado en cada uno de los demandantes, debieron necesariamente afectar su estado emocional, de manera inmediata y durante todo el período en que estos estuvieron detenidos, como también en los tiempos futuros.

**DECIMOQUINTO:** Que, con la documental rendida por los actores y no objetada por causal legal, en su oportunidad, se puede establecer que está



Foja: 1

reconocida, respecto de cada uno de los demandantes, la calidad de "Preso Político y Torturado" en las Nóminas de personas reconocidas como víctimas, del informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Valech I ó Valech II), y por informes psicológicos y médicos acompañados al proceso, es posible advertir que las personas que son violentadas física y psicológicamente, como en el caso de autos, sufren perjuicios, daño emocional y secuelas tanto físicas como psicológicas que perduran hasta la actualidad y que deben ser reparados, y que corresponde a la consecuencia normal de la detención, prisión, tortura y exilio sufridos por los actores.

**DECIMOSEXTO:** Que, determinada la existencia del daño moral sufrido por los demandantes, es necesario fijar su cuantía en dinero, para lo cual el tribunal considerará prudencialmente el mérito de los antecedentes aportados al proceso, a fin de fijar el quantum indemnizatorio que se corresponda a la entidad y naturaleza del daño ocasionado a las víctimas.

Así las cosas, es preciso señalar que los demandantes estuvieron detenidos o privados de libertad, según sus propios relatos: **Carlos Ramón**



Foja: 1

**Díaz Pérez,** 3 meses y 17 días; **Eladio Marcelino Aguilar Díaz,** 9 días; **Eliecer Ruiz Mayorga,** 11 días; y, **Rene Maximiliano Rodríguez López,** 3 años. Por otra parte, los informes psicológicos acompañados, sin bien concluyen que los demandantes, presentan trastorno de estrés post traumático de carácter grave, daños y secuelas psicológicas, no son del todo precisos ni certeros del nivel de sufrimientos de los actores, para justificar la alta cifra que solicitan en su demanda.

Por lo expuesto, esta sentenciadora concluye que dicha situación produjo en los actores, daño que es necesario reparar por cuanto es deber del Estado respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana como son la integridad física y psíquica, no siendo posible tolerar que en la especie los agentes del Estado actuaran de manera reprochable y contrarios a los derechos que tanto la legislación interna como internacional protegen, por lo que el Estado debe responder por ello, considerando para ello, el monto que ya han recibido de parte del Estado.

**DECIMOSEPTIMO:** Que, en consecuencia, encontrándose acreditado el hecho que los actores



Foja: 1

sufrieron daño debido a la detención y torturas, daño que sólo se puede enmarcar dentro de aquél denominado "moral"; por otro lado, teniendo presente los montos que perciben o han percibido los demandantes en su calidad de "Preso Político y Torturado", hace igualmente plausible acoger la demanda, condenándose al Fisco de Chile, a pagar a **Carlos Ramón Díaz Pérez**, la suma única y total de **\$30.000.000.- (treinta millones)**; a **Eladio Marcelino Aguilar Díaz**, la suma única y total de **\$20.000.000.- (veinte millones)**; a **Eliecer Ruiz Mayorga**, la suma única y total de **\$20.000.000.- (veinte millones)**; y, a **Rene Maximiliano Rodríguez López** la suma única y total de **\$80.000.000.-, (ochenta millones)**, que se estima justa y equitativa, considerando como se ha dicho que actualmente son, han sido y serán beneficiarios de las leyes de reparación respectivas ya indicadas.

El monto indemnizatorio fijado previamente, deberá pagarse debidamente reajustado entre la fecha del presente fallo y aquella en que se haga el pago total y efectivo; más los intereses corrientes para operaciones de crédito de dinero no reajustables, devengados durante el mismo período.



Foja: 1

**DECIMOOCTAVO:** Que, atendido lo dispuesto en el artículo 144 del Código del Procedimiento Civil, no habiendo sido totalmente vencido y estimando que tuvo motivo plausible para litigar, el Fisco no será condenado en costas.

Por estas consideraciones, y visto además, lo dispuesto en los artículos 144, 160, 170, 254, 748 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; el Decreto 1040, de 26 de Septiembre de 2003, la Ley 19.992 y la Ley 20.874;

**SE DECLARA:**

1.- Que **SE RECHAZAN** las excepciones opuestas por el demandado;

2.- Que **SE ACOGE** la demanda intentada a **folio 1**, y se condena al Fisco de Chile a pagar a los actores, **CARLOS RAMÓN DÍAZ PÉREZ**, la cantidad de **\$30.000.000.- (treinta millones)**; a **ELADIO MARCELINO AGUILAR DÍAZ**, la cantidad de **\$20.000.000.- (veinte millones)**; a **ELIECER RUIZ MAYORGA**, la cantidad de **\$20.000.000.- (veinte millones)**; y, a **RENE MAXIMILIANO RODRÍGUEZ LÓPEZ** la cantidad de **\$80.000.000.-, (ochenta millones)**, en la forma señalada en el motivo final.



C-3725-2021

Foja: 1

3.- Que, **no** se condena en costas al demandado, atendido que tuvo motivo plausible para litigar.

Regístrese y notifíquese, y elévese en consulta si no se apelare.

**ROL C-3725-2021**

**DECTADA POR ISABEL MARGARITA ZUÑIGA ALVAYAY,  
JUEZA TITULAR DEL PRIMER JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO.**

**rrs**

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, diecinueve de Diciembre de dos mil veintidós**



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XMYXXCZYXNV

